



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 11 de diciembre de 2020

AUTO No. 121.

MAGISTRADO PONETE: OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

ACCIÓN:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2019-00766-00
DEMANDANTE:	EDUARDO PEREA CHÁVEZ Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ASUNTO	LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO

I. ASUNTO

Los señores EDUARDO PEREA CHÁVEZ, ROSA AMELIA PEÑA RODRÍGUEZ, SARAHY PEREA PEÑA, DIEGO FERNANDO PEREA PAVÓN, BRYAN ESTEBAN PEREA PEÑA, ARNOLD EDUARDO PEREA MARTÍNEZ, MARÍA ELISA CHÁVEZ GÓMEZ, DOLLY PEREA CHÁVEZ, ROSALBA PEREA CHÁVEZ, MARIELA CHÁVEZ y JOSEFINA CHÁVEZ presentaron demanda ejecutiva en contra de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que se dé cumplimiento a lo ordenado en sentencia del 17 de marzo de 2017 proferida por el Consejo de Estado.

Procede el Despacho a verificar si en el *sub examine* se cumplen los requisitos para librar mandamiento.

II. ANTECEDENTES

La obligación que se pretende recaudar se sustenta en la sentencia del 23 de marzo de 2017¹, proferida por el Consejo de Estado, a través de la cual resolvió lo siguiente:

“REVÓCASE la sentencia del 18 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone:

a) DECLÁRASE responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad al señor Eduardo Perea Chávez.

b) CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios morales, 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de las siguientes personas: Eduardo Perea Chávez, Rosa Amelia Peña Rodríguez, Diego Fernando Perea Peña, Bryan Esteban Perea Peña, Sarahy Perea Peña, Arnold Eduardo Perea Martínez y María Elisa Chávez Gómez, al igual que 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de las siguientes personas: Dolly Perea Chávez, Rosalba Perea Chávez, Mariela Chávez y Josefina Chávez.

¹299-306 del cuaderno nro. 3.



c) CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, cincuenta y siete millones seiscientos veintidós mil ciento cincuenta y siete pesos con setenta y dos centavos (\$57.622.157,72), a favor del señor Eduardo Perea Chávez.

d) CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, cien millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos con noventa centavos (\$100.864.542,90), a favor del señor Eduardo Perea Chávez.

e) NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

f) Sin condena en costas.

g) DESE cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C.P.C.

h) Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.”

La parte demandante solicita que se libre mandamiento de pago por las sumas de dinero cuyo pago fue ordenado en la mentada sentencia².

III. CONSIDERACIONES

DEL PROCESO EJECUTIVO Y EL TÍTULO EJECUTIVO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL:

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA³ establece que son títulos ejecutivos: **(i)** las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a una entidad pública al pago de sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii)** el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato —que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual— o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y **(iv)** las copias

² Folios 6-12.

³ Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.



auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP⁴ establece que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: **(i) un documento que provenga del deudor o de su causante; (ii) una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; (iii) las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y (iv) los demás documentos que expresamente disponga la ley.**

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *“presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”*.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva **es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo**, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

El título ejecutivo contiene tanto elementos sustanciales como formales. En cuanto a los primeros, se debe verificar si aquél contiene una obligación clara, expresa y exigible al momento de incoarse la demanda. En tal sentido, el Consejo de Estado ha dicho:⁵

1. La obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa.
2. La obligación es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación.
3. La obligación es exigible cuando únicamente es ejecutable cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido.

A su turno, la doctrina se ha pronunciado sobre la necesidad de que el título objeto de ejecución sea claro y expreso, en los siguientes términos⁶:

“El ser expresa la obligación, implica un requisito que se puede entender mejor si analizamos etimológicamente el concepto. El vocablo expresar, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa “manifestar con palabras lo que uno quiere dar a entender” y expreso lo que es “claro, patente, especificado”,⁷ conceptos que aplicados al del título ejecutivo implican que se manifieste con palabras, quedando constancia, usualmente documental escrita y en forma inequívoca de una obligación; de

⁴ Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

⁵ Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. *Los procesos ejecutivos*. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.

⁶ Código General del Proceso, Parte Especial, Hernán Fabio López Blanco, páginas 507 y 508, DUPRÉ Editores, Bogotá D.C., 2017.

⁷ Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 21ª ed. Madrid, 1992, págs. 661.



ahí que las obligaciones implícitas y las presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son demandables por vía ejecutiva.⁸

Como complemento se exige, con redundancia, pues se acaba de ver que ser expreso conlleva la claridad, que la obligación sea clara, es decir que sus elementos constitutivos, sus alcances, emerjan con nítida perfección de la lectura misma del título ejecutivo, en fin, que no se necesiten esfuerzos de interpretación para establecer cuál es la conducta que puede exigirse al deudor”.

Respecto a los elementos formales del título ejecutivo, es de precisar que estos son los que se refieren a los documentos que contiene el respectivo título ejecutivo y a la forma en la que deben aportarse. Es de aclarar que la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha entendido que, en los asuntos donde se pretende el cumplimiento de decisiones judiciales a través del proceso ejecutivo, el título que presta mérito no es de los denominados “complejos”⁹; puesto que solo se requiere copia de la sentencia ejecutoriada con la que se reconoció y ordenó el pago de una suma de dinero, ya que es esta la que contiene la obligación expresa, clara y exigible. Al respecto, en sentencia de tutela del 18 de febrero de 2016,¹⁰ se indicó lo siguiente:

“(…)

Por ello, la sentencia proferida por los jueces administrativos, una vez ejecutoriada, constituye por sí sola el título ejecutivo idóneo para solicitar la ejecución de la sentencia, sin que sea necesario que se acompañe o anexe el acto administrativo que dio cumplimiento parcial a la sentencia. Es cierto que la norma citada indica que los actos administrativos expedidos por las entidades de derecho público también constituyen títulos ejecutivos. Pero ello implica, según la interpretación de la Subsección A, que es predicable en cuando que los mismos sean los que crean, modifican o extinguen un derecho. Situación diferente se presenta cuando se trate de actos administrativos de ejecución o expedidos en cumplimiento de la sentencia judicial, porque es ésta última la que declara, constituye el derecho u ordena la condena

Así mismo, se determinó que exigir la copia auténtica del acto administrativo que dio cumplimiento al fallo judicial a ejecutar, se constituye en un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto”. Con relación a ello, se indicó:

⁸ Cfr. Hernando MORALES MOLINA, Curso de derecho procesal civil, Parte especial 6ª ed., Bogotá, Edit. ABC, 1973, pág. 75, quien afirma con acierto que no valen, pues, las expresiones meramente indicativas o representativas de la existencia de la obligación, ni tampoco las expresiones presuntas, salvo el caso de la confesión ficta y en éste, únicamente respecto de las preguntas asertóricas formuladas al interrogado que no compareció. Es decir, que las llamadas obligaciones implícitas, esto es, las que están incluidas en el documento (tanto en el escrito como en el documento que contiene la declaración verbal), pero sin que estén expresamente declaradas, no pueden exigirse ejecutivamente.

⁹ Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, C.P. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en providencia 14 de marzo de 2019 Radicación número: 25000-23-42-000-2015-02057-01(0044-16).

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: William Hernández Gómez Bogotá, D.C. Sentencia del 18 de febrero de 2016 bajo el número de radicado: 11001-03-15-000-2016-00153-00(AC) Actor: Flor Maria Parada Gómez Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Posición reiterada en la sentencia de tutela del 3 de agosto de 2017, con ponencia del Dr. William Hernández Gómez, dentro del proceso 11001-03-15-000-2017-01577-00(AC) « Esta Corporación a través de la Sección Tercera ha señalado que, por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. En ese caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. Por excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido el acto para acatar la decisión del juez. [...] No obstante, esta Subsección considera que para efectos de librar mandamiento de pago de las sentencias emitidas por los funcionarios pertenecientes a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, **no es requisito la copia de los actos administrativos que dieron cumplimiento a las órdenes judiciales para conformar el título ejecutivo.** [...] De la norma anterior [artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], claramente se deduce que constituyen títulos ejecutivos... (i) la sentencia debidamente ejecutoriada proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y; (ii) las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. Ahora bien, según el CPC y el CPACA la sentencia es la providencia que decide sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito. Por tanto, es una integralidad jurídica autónoma y suficiente con fuerza de cosa juzgada, provista de ejecutividad y ejecutoriedad para que sea debida y oportunamente cumplida.



“Repárese que las resoluciones núm. PAP 039428 del 21 de febrero de 2011 y núm. UGM 010620 de 2011 fueron expedidas por la entidad con el único propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en las sentencias citadas, luego, no son actos administrativos que las complementaron o adicionaron y en modo alguno cambiaron lo que en ellas se encuentra ordenado. En consecuencia, no forman parte del título ejecutivo como lo expresó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, a la entidad demandada correspondía demostrar que ya había cumplido la obligación impuesta en las sentencias, para lo cual debía allegar las pruebas que lo demostraran, que en este caso, no son otras que los actos administrativos expedidos en cumplimiento de la sentencia, conforme lo consagrado en el artículo 509 del C.P.C.. Al ordenarse a la parte demandante que allegara copia auténtica de los actos administrativos que dieron cumplimiento parcial a la condena impuesta en la sentencia, es un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, lo cual fundamenta la intervención en sede de tutela.

Bajo tal perspectiva, en nada influye dentro del proceso ejecutivo que las mencionadas resoluciones hubiesen sido aportadas en copia simple y en esa medida, al Tribunal correspondía librar mandamiento de pago, puesto que el título ejecutivo estaba conformado por las sentencias que prestan mérito ejecutivo de las cuales surgió la obligación clara, expresa y exigible a cargo de la entidad.¹¹ (Negritas fuera del texto)

Entre tanto, en lo que refiere a la forma en que se deben aportar las sentencias que contienen la obligación a ejecutar, es preciso indicar que el artículo 114 del Código General del Proceso dispone:

“ Artículo 114. Copias de actuaciones judiciales. Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:

(...)

2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria.... (negritas por fuera de texto)

Como se puede colegir, las sentencias que se pretenden valer como título ejecutivo, conforme al precitado dispositivo normativo se deben aportar con su respectiva constancia de ejecutoria. Así mismo, el Consejo de Estado, en sede de tutela indicó que “ el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, antes citado, no exige que el mencionado documento deba estar en original. En efecto, la norma se limita a señalar que constituyen título ejecutivo “las sentencias debidamente ejecutoriadas (...)”, además, “el artículo 244 del Código General del Proceso, establece que “(...) los documentos públicos o privados emanados de las partes o terceros, en original o copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos (...)”. Así mismo, dispone que (...)” se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo”.¹²

De acuerdo con los apartes normativos, doctrinales y jurisprudenciales expuestos, en relación a los procesos ejecutivos derivados del incumplimiento total o parcial de una sentencia judicial, se puede arribar a las siguientes conclusiones:

¹¹ *Ibídem*

¹² Aparte tomado del fallo de tutela del 3 de agosto de 2017, bajo el proceso 11001-03-15-000-2017-01577-00(AC)



1. Prestarán mérito ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se haya condenado a la administración al pago de una suma de dinero.
2. El título ejecutivo en mención debe contener una obligación expresa, clara y actualmente exigible.
3. Las sentencias, junto con su constancia de ejecutoria, pueden ser aportadas al proceso en copia simple, toda vez que se presumen auténticas de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código General del Proceso.
4. No es indispensable aportar la copia o el original del acto administrativo que da cumplimiento a la decisión judicial, toda vez que este no hace parte del título ejecutivo que solo está constituido por las sentencias judiciales que contienen la obligación. De exigirse, el juez incurrirá en un exceso ritual manifiesto.
5. Si bien el acto administrativo que acata la decisión judicial no hace parte del título ejecutivo, este sirve de contraste para determinar si la sentencia fue acatada a cabalidad por parte de la administración.

3.2. CASO CONCRETO:

Como se puede colegir del anterior acápite, para librar mandamiento de pago se debe verificar:

1. La demanda fue interpuesta en la jurisdicción y ante el juez competente;
2. El término para la presentación de la demanda no ha vencido;
3. La demanda formulada por el ejecutante cumple con los requisitos mínimos señalados en la ley;
4. Que el título judicial sea claro, expreso y exigible, esto es, i) que haya una obligación determinada o determinable; ii) la ejecutante acredite que la obligación está a su favor; iii) se tiene certeza de quién es el deudor; iv) transcurrió el término legal o se cumplió la condición sin que el deudor cumpliera con la obligación que tenía a su cargo.
5. si hay lugar al reconocimiento de intereses o no.

• DE LA JURISDICCIÓN Y DEL JUEZ COMPETENTE:

En el presente asunto, El artículo 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con la ejecución de condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero, consagra lo siguiente:

“ARTÍCULO 299.

...

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este Código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento”.

Según la regla de competencia por razón del territorio consagrada en el numeral 9° del artículo 156 del C.P.A.C.A., “En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una



conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva”.

Es claro entonces que en vigencia del C.P.A.C.A, será competente para la ejecución de las condenas impuestas por esta jurisdicción a una entidad pública, el mismo Juez que profirió la respectiva providencia.

Ahora, como quiera que en el presente caso, la providencia judicial que se pretende ejecutar fue proferida en vigencia del Código anterior (Decreto 01 de 1984), dentro del cual no se regulaba expresamente que el Juez de conocimiento fuera el mismo de la ejecución; deberán analizarse las reglas de competencia aplicadas para los procesos ejecutivos adelantados bajo el nuevo Estatuto (Ley 1437 de 2011), pero fundamentados en la ejecución de una providencia judicial proferida con anterioridad a su vigencia, para definir sobre la competencia de la presente ejecución.

Sobre el particular, el Consejo de Estado en providencia de fecha del diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014), Expediente No. 11001032500020140020900, con ponencia del Consejero GERARDO ARENAS MONSALVE, señaló que en los casos donde se pretenda la ejecución de un título judicial compuesto por una providencia judicial, la conciliación y la providencia que aprueba la misma, es el Despacho que la profirió a quien le compete conocer del trámite ejecutivo, al tenor de lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 156 y inciso 1° del artículo 298 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aunque la providencia haya sido proferida en vigencia del Estatuto anterior.

No obstante lo expuesto, la Sala Plena de esta Corporación en providencia de fecha 11 de marzo de 2015, señaló que SOLO las condenas judiciales expedidas bajo el actual compendio procesal (C.P.A.C.A), podrían ser ejecutadas a continuación del proceso declarativo que les dio origen, como quiera que el anterior Estatuto (C.C.A), no consagraba dicha regla de competencia. Que por tanto, si el proceso ejecutivo se fundamenta en un pronunciamiento judicial proferido en vigencia del Código anterior – Decreto 01 de 1984-, pero se interpone bajo la órbita del nuevo Estatuto - la Ley 1437 de 2011-, debe ser sometido a REPARTO como una demanda autónoma e independiente del proceso declarativo matriz, lo que implica que el juez que profirió la providencia respectiva no es el competente exclusivo para conocer de su ejecución.

Sin embargo, la anterior postura fue cambiada por la Sala Plena de esta Corporación¹³, acogiendo la decisión unificada mediante Auto Interlocutorio I.J. O-001-2016 del 29 de julio de 2016, en el que la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió sobre la competencia para conocer de las demandas ejecutivas, exaltando que el factor de conexidad en materia de distribución de competencias establecidas en la ley 1437 de 2011 (actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), para conocer de la ejecución de la Sentencia o una conciliación aprobada por esta jurisdicción a continuación del proceso ordinario que la origina, conforme a los artículos 297, 298 y 299 *ejusdem*, es aplicable a la ejecución de las Sentencias proferidas en vigencia del anterior ordenamiento (Decreto Ley 01 de 1984), aclarando que, se trata de un nuevo proceso, de un nuevo trámite judicial aunque se realice a continuación y dentro del proceso anterior ya que da lugar a un nuevo fallo y Sentencia judicial de conformidad con el artículo 443 ordinales 3, 4 y 5 de Código General del Proceso.

Por lo anterior, este Despacho es competente para conocer de la demanda ejecutiva, por ser el juez de conocimiento del proceso ordinario.

¹³ En providencia del treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), Radicación: 76-001-33-33-012-2016-00388-01, con ponencia del Magistrado JHON ERICK CHAVES BRAVO.



- **CADUCIDAD:**

La Ley 1437 de 2011, que regula lo referente a los requisitos de la demanda, establece dentro de su artículo 164 el plazo para la presentación oportuna del libelo introductorio de cada medio de control. Para la caducidad de las demandas incoadas en ejercicio del proceso ejecutivo de títulos derivados del contrato, de decisiones proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales del estado de conformidad con el literal (k) de la referida disposición, se estableció un término de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.

En el presente asunto, la **acción ejecutiva se encuentra vigente** al momento de la presentación de la demanda, pues se interpuso dentro del término señalado en el artículo 164, literal K)., toda vez que la sentencia cuyo cumplimiento se pretende quedó ejecutoriada el 3 de abril de 2017 y la demanda ejecutiva se presentó el 27 de agosto de 2019, es decir, dentro de los cinco (5) años de que trata la norma en cita.

- **LA DEMANDA FORMULADA POR EL EJECUTANTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS SEÑALADOS EN LA LEY:**

Revisada la demanda, se tiene que los señores EDUARDO PEREA CHÁVEZ, ROSA AMELIA PEÑA RODRÍGUEZ, DIEGO FERNANDO PEREA PEÑA, BRYAN ESTEBAN PEREA PEÑA, SARAHY PEREA PEÑA, ARNOLD EDUARDO PEREA MARTÍNEZ, MARÍA ELISA CHÁVEZ GÓMEZ, DOLLY PEREA CHÁVEZ, ROSALBA PEREA CHÁVEZ, MARIELA CHÁVEZ y JOSEFINA CHÁVEZ **se encuentran legitimados en la causa por activa**, por ser los beneficiarios de la condena impuesta a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en la sentencia objeto de ejecución.

Por su parte, la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN se encuentra **legitimada en la causa por pasiva**, por ser la condenada en la sentencia objeto de ejecución.

También, la demanda cumple con los requisitos establecidos en los artículos 82 y ss del CGP (designación del juez, nombre y domicilio de las partes, nombre del apoderado, las pretensiones, los hechos fundamento de las pretensiones el poder, la sentencia título de ejecución, la constancia de ejecutoria de la precitada providencia, la solicitud de pago, la respuesta dada por la entidad ejecutada, el CD y la dirección electrónica del apoderado de la parte ejecutante.

- **QUE EL TÍTULO JUDICIAL SEA CLARO, EXPRESO Y EXIGIBLE, ESTO ES, I) QUE HAYA UNA OBLIGACIÓN DETERMINADA O DETERMINABLE; II) LA PARTE EJECUTANTE ACREDITE QUE LA OBLIGACIÓN ESTÁ A SU FAVOR; III) SE TIENE CERTEZA DE QUIÉN ES EL DEUDOR; IV) TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO LEGAL O SE CUMPLIÓ LA CONDICIÓN SIN QUE EL DEUDOR CUMPLIERA CON LA OBLIGACIÓN QUE TENÍA A SU CARGO.**

En el caso concreto, debe mencionar el Despacho que la obligación es **EXPRESA**, pues se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa. Es decir, en la sentencia judicial se condenó a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar unas sumas de dinero a favor de los ejecutantes y



se dispuso dar cumplimiento a la providencia dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

Es **CLARA**, pues sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación, pues la efectividad de la obligación debe surtirla la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a favor de los demandantes por unas sumas y equivalencias determinadas, con sus correspondientes intereses corrientes y moratorios.

Es **EXIGIBLE** pues no depende del cumplimiento de un plazo o condición toda vez que la sentencia quedó ejecutoriada el 3 de abril de 2017, la parte ejecutante solicitó el pago de la misma el 26 de abril de 2017 y transcurrió el plazo fijado en el artículo 177 del C.C.A, para su cumplimiento, sin que se haya realizado el pago.

- **HAY LUGAR AL RECONOCIMIENTO DE INTERESES O NO:**

Ahora, en cuanto a los intereses moratorios se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 177 del CCA, de conformidad con los criterios que a continuación se señalan:

- Las cantidades líquidas reconocidas en la sentencia devengarán intereses comerciales y moratorios.
- Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.

En el presente asunto, la solicitud de pago fue radicada el 26 de abril de 2017, es decir, dentro del término de los 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia (3 de abril de 2017). Por tanto, en este caso no cesó la causación de los intereses corrientes y moratorios.

Por lo anterior y una vez estudiada la presente demanda ejecutiva por el despacho, se evidencia que esta reúne los requisitos de los artículos 82, 83 y siguientes, del C.G.P. y contiene título con los requisitos legales conforme al artículo 422 Ibídem, el despacho dando cumplimiento al Art. 430 del C.G.P. por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

R E S U E L V E

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, por los siguientes valores:

- Para el señor EDUARDO PEREA CHÁVEZ, por concepto de perjuicios morales, la suma de \$59.017.360; por concepto de perjuicios materiales: en la modalidad de lucro cesante, \$100.864.542,90 y en la modalidad de daño emergente, \$57.622.157,72.
- Para la señora ROSA AMELIA PEÑA RODRÍGUEZ, por concepto de perjuicios morales, la suma de \$59.017.360.



- Para el señor DIEGO FERNANDO PEREA PEÑA, por concepto de perjuicios morales, la suma de \$59.017.360.
- Para el señor BRYAN ESTEBAN PEREA PEÑA, por concepto de perjuicios morales, la suma de \$59.017.360.
- Para la señora SARAHY PEREA PEÑA, por concepto de perjuicios morales, la suma de \$59.017.360.
- Para el señor ARNOLD EDUARDO PEREA MARTÍNEZ, por concepto de perjuicios morales, la suma de \$59.017.360.
- Para la señora MARÍA ELISA CHÁVEZ GÓMEZ, por concepto de perjuicios morales, la suma de \$59.017.360.
- Para la señora DOLLY PEREA CHÁVEZ, por concepto de perjuicios morales, la suma de \$29.508.680.
- Para la señora ROSALBA PEREA CHÁVEZ, por concepto de perjuicios morales, la suma de \$29.508.680.
- Para la señora MARIELA CHÁVEZ, por concepto de perjuicios morales, la suma de \$29.508.680.
- Para la señora JOSEFINA CHÁVEZ, por concepto de perjuicios morales, la suma de \$29.508.680.
- Por los intereses moratorios sobre las sumas anteriormente mencionadas, causados desde la fecha de ejecutoria de la sentencia título de ejecución, esto es, el 3 de abril de 2017 hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación, de conformidad con lo previsto en los artículos 176 y 177 del CCA.

SEGUNDO: Se **ADVIERTE** que las sumas ordenadas en los numerales anteriores serán nuevamente objeto de revisión dentro de la oportunidad procesal pertinente.

TERCERO: ORDENAR a la parte ejecutada, que de conformidad con el artículo 431 del Código General del Proceso, **deberá cancelar las anteriores sumas a la parte demandante dentro de los cinco (5) días siguientes al presente proveído, o en su defecto, proponer excepciones en el término de diez (10) días siguientes a la presente decisión.**

CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente providencia a la parte demandada **NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** a los buzones de correos electrónicos creados por dichas entidades para efecto de recibir notificaciones judiciales de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020. La notificación se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje.

La parte demandante deberá remitir al correo electrónico rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co, dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación por estado de la presente providencia, la



constancia de remisión efectiva de la copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio.

Hasta tanto no se alleguen las constancias anteriormente referidas, no se procederá por la Secretaría de esta Corporación a realizar la notificación personal a los demandados. El incumplimiento de esta carga procesal dará lugar a la aplicación del artículo 178 del CPACA.

QUINTO: RECONOCER personería al abogado Julio César Pérez Chicué, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.887.646 y portador de la Tarjeta Profesional No. 60.880 del C.S.J, para actuar dentro de la acción ejecutiva en nombre y representación de la parte demandante, en los términos de los poderes conferidos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT
Magistrado